

“UN PROGRAMA DE RECUPERACIÓN POPULAR DE LA ECONOMÍA”.

DOCUMENTO DE LOS ECONOMISTAS DE IZQUIERDA (EDI).

RESUMEN: Los Economistas de Izquierda cuestionamos la continuidad del modelo empobrecedor. Entendemos que los acuerdos suscriptos con el FMI consolidan la degradación social y otorgan a ese organismo el doble status de acreedor privilegiado y auditor de la política económica argentina. Este curso reafirma la preponderancia de los intereses de los grupos monopólicos, la banca transnacional y las grandes empresas favorecidos en el último cuarto de siglo. Los acreedores cobran la deuda a costa el sacrificio popular.

Consideramos que la disyuntiva de utilizar el excedente del superávit fiscal para concretar o no mayores pagos es una falsa opción. Este superávit se obtiene anclando los sueldos, las jubilaciones y las pensiones deterioradas por la inflación y posponiendo la realización de indispensables obras públicas. Ningún problema de la mayoría popular se resuelve dirimiendo el uso de esa suma adicional surgida del ajuste. Para comenzar a recomponer el ingreso popular hay que destinar todo el dinero girado a los banqueros a las prioridades sociales.

Nos oponemos también a la contracción de los gastos productivos que consagró el presupuesto 2004 que fue amoldado a la exigencias del FMI. Proponemos modificar radicalmente la actual estructura impositiva regresiva para lograr un aumento significativo de la recaudación resultante de la introducción de gravámenes a la riqueza. Pensamos que la reactivación en curso constituye una reacción cíclica frente a la depresión precedente que está generando altas ganancias para una minoría de empresarios. Estos beneficios deberían quedar sujetos a un impuesto extraordinario que permitiría contrarrestar el aumento de la desigualdad social.

Con una retórica antiliberal del gobierno pretende ocultar que el modelo de bajos salarios, consumo segmentado e inversiones primarizadas se mantiene invariable. Por eso planteamos un programa alternativo de recuperación inmediata del poder adquisitivo, cuya financiación debería recaer sobre quiénes acumularon fortunas durante la última década.

Propiciamos un seguro universal de 327 pesos más una asignación de 45 pesos por hijo para asegurar alimento y educación a toda la población. La ausencia de este derecho a la vida es inadmisibles en un país que ocupa el quinto lugar del ranking mundial de exportadores de alimentos. Este seguro pondría fin a la manipulación oficial de los planes de desempleo y contribuiría a fijar un piso al achatamiento salarial. Consideramos que el drama del desempleo no se resuelve maquillando estadísticas o esperando un “derrame” de la reactivación. Hay que garantizar el cumplimiento de las 8 horas como primer paso hacia la reducción de la jornada laboral, implementar un plan de obras públicas, legislar la expansión de la ocupación en las empresas de altos rendimientos y asegurar el financiamiento público de la pequeña producción.

En nuestra opinión la retracción salarial agrava la situación de pobreza que afecta a la masa de trabajadores informales. Este deterioro coexiste con significativos aumentos de la productividad en el sector privado formal y se asienta el congelamiento de sueldos de los empleados públicos. La recomposición salarial debería implicar la fijación de un salario mínimo de 716 pesos e incrementos generales del 20 al 30 % para todos los asalariados del sector privado y público. De esta forma se podría motorizar un crecimiento basado en el consumo popular. Contraponer los auxilios a los “excluidos” con las mejoras a los “incluidos” constituye una falsa antinomia. Hay dinero para todos si el ajuste recae sobre los capitalistas.

Por otra parte, consideramos que el cuadro de flexibilización laboral actualmente vigente neutralizaría cualquier repunte del salario. Por esta razón no alcanza con derogar la “ley banelco” si se preservan todos los atropellos patronales consumados en los últimos años. Para reconstituir una fuerza laboral calificada hay que reimplantar los derechos históricamente conquistados por los asalariados.

Estimamos que el funcionamiento de las fábricas recuperadas constituye un gran éxito de la resistencia obrera que ilustra el carácter prescindible de los capitalistas en el manejo de las empresas. El gobierno pretende diluir este significado promoviendo la conversión de estas fábricas en “pymes”. Sostener estas experiencias es vital para avanzar en la gestación de un programa popular de recuperación de la economía.

Los integrantes del EDI alertamos contra el colapso del sistema previsional que se agrava con la expansión del trabajo en negro y el incumplimiento generalizado de los aportes. Si este desmoronamiento resultante de la desfinanciación presupuestaria que generó la creación de las AFJP no es revertido, la mayoría de la población no podrá jubilarse o cobrará pensiones de miseria. A través del endeudamiento público se ha financiado el fraude de las AFJP, que ahora transfieren a sus afiliados las pérdidas generadas por la desvalorización de los bonos estatales que acumularon en sus carteras. El gobierno avala esta estafa porque utiliza estos recursos para refinanciar la deuda pública y por eso promueve una reforma que preservará a las AFJP, consagrando una bajísima jubilación básica y un complemento dependiente de la marcha de ese negocio. Proponemos anular el régimen de capitalización y reimplantar los aportes patronales, a fin de recrear un sistema único, universal y autofinanciado.

Llamamos también la atención sobre las maniobras que realiza el gobierno para enmascarar su sostén de las privatizaciones. A pesar de la hostilidad popular contra estas concesiones los usuarios no son consultados, mientras se renegocian en secreto los contratos y comienzan a implementarse los tarifazos. Persiste el criterio de asignar los negocios rentables a las compañías y las pérdidas al estado, cuándo correspondería recuperar la propiedad pública de todo este sector. Si se pretende cambiar el curso actual, no alcanza con regular las actividades o controlar la renta. Hay que retomar el manejo directo de las empresas, porque la falta de inversión se ha generalizado y amenaza el abastecimiento energético y la provisión de agua. Además, mientras se encubre con demagogia la

continuada declinación del ferrocarril, el negocio de los petroleros privados marcha viento en popa. Un programa de reconstrucción de los servicios públicos exige recapturar integralmente la administración pública de este sector para implementar una redistribución racional de las inversiones.

Otro tema central es el futuro del sistema financiero, porque sigilosamente se afianzó la compensación de los banqueros que expropiaron a los ahorristas. El monto de este socorro alcanzó cifras siderales, mientras se consumó la confiscación de los pequeños depositantes. Pero a pesar de este salvataje la adaptación del sistema financiero al nuevo contexto económico no ha concluido y por eso la recomposición del crédito es débil. Ha quedado nuevamente demostrada la inutilidad de un régimen privado sostenido en el rescate oficial y es evidente la conveniencia de sustituirlo por un sistema bancario único y estatal.

También rechazamos la negociación en curso de un “ALCA light” que consolidará la dominación comercial norteamericana, favoreciendo las ganancias de los grupos exportadores locales en desmedro del resto de la población. Estas tratativas reflejan la crisis del MERCOSUR que no ha servido para revertir la desintegración regional, porque cada gobierno negocia con el FMI su propio plan de ajuste. Impulsamos un cambio de prioridades: coordinar la solidaridad y no la competitividad, asegurar la estabilidad del empleo y no la libre movilidad del capital, eliminar la pobreza y no las restricciones a los negocios de las corporaciones.

Los Economistas de Izquierda rechazamos la naturalización de la miseria y presentamos ese documento para contribuir a la elaboración del programa alternativo que se está gestando en el movimiento de resistencia popular.

“UN PROGRAMA DE RECUPERACIÓN POPULAR DE LA ECONOMÍA”.

DOCUMENTO DE LOS ECONOMISTAS DE IZQUIERDA (EDI).

En un nuevo contexto económico se está afianzando la degradación social. Esta constatación es el punto de partida del nuevo documento colectivo que difundimos los Economistas de Izquierda. Nuestro propósito es caracterizar cuáles son los cambios que se están registrando en el funcionamiento del modelo económico empobrecedor que mantiene en pie el gobierno. En oposición a este continuismo proponemos una alternativa centrada en la recomposición inmediata de los ingresos populares.

Nuestro análisis aborda primero los tres rasgos que distinguen la coyuntura actual: negociación de una deuda en default, superávit presupuestario y reinicio de un ciclo ascendente de los negocios, para explicar luego como se podría implementar un plataforma popular alternativa.

LAS PRESIONES DEL ACREEDOR PRIVILEGIADO.

La deuda pública externa constituye el principal condicionante del proceso económico argentino, tanto por su magnitud como por la crisis que ha desatado la cesación de pagos. Esta situación determina un nivel de ingerencia y presiones permanentes de los acreedores. Cómo estas tensiones subsistirán durante un largo período, conviene distinguir las reyertas cotidianas de la estrategia central que promueve el gobierno: pagar la deuda con un superávit fiscal que consolida la miseria popular. Este es el dato relevante que no hay que perder de vista en medio de los chisporroteos que acompañan a la renegociación de la hipoteca.

El gobierno ha decidido que el 3 % del PBI destinado a la deuda se distribuya entre dos grupos de acreedores privilegiados: los organismos internacionales y los tenedores nacionales de los títulos emitidos luego del default. Los restantes acreedores han quedado rezagados y con ellos se discuten opciones de quitas del pasivo.

Lavagna y los economistas heterodoxos argumentan que con el primer grupo hay que cumplir, mientras que con el segundo resulta posible demorar los pagos. Pero nunca explican las razones de esta selección, aunque a veces sugieren que por este camino se evita una nueva crisis recesiva. Sin embargo, la cesación parcial de pagos que impera desde hace más de dos años no ha impedido en el reinicio del crecimiento, el boom de exportaciones, ni tampoco ha derivado en embargos significativos de los bienes en el exterior. Esta coexistencia de la reactivación y el superávit comercial con el default indica estos procesos no guardan la estrecha relación que auguraban tantos economistas. Pero más allá de estas eventualidades, lo importante es recordar que la crisis no ha sido consecuencia de ningún desplante a los acreedores, sino de las sucesivas

transferencias de fondos y compromisos de ajuste que asfixiaron la actividad productiva.

La “necesidad de acordar con el FMI” es un mito tan arbitrario como todas las creencias propagadas durante la última década. Antes se decía que la “convertibilidad era inamovible” o que “la extranjerización del sistema financiero garantizaba su solidez” y ahora se afirma que concertar con los organismos es indispensable para que la “Argentina se mantenga dentro del mundo”. Pero en realidad, la atadura a estas instituciones condujo a la marginación financiera del país y al sometimiento actual. Los pagos al FMI tienen un efecto más gravoso que cualquier permanencia en el universo de financiero internacional, porque son solventados con la miseria popular.

Los organismos han cobrado 7.200 millones de dólares netos desde el inicio el default. En lugar de refinanciar los vencimientos con nuevos créditos han absorbido divisas para reducir su exposición financiera. Y cuánto más cobran mayores son sus exigencias. Cada trimestre revisan la recaudación y si observan mejoras en los recursos del Tesoro reclaman más dinero. La tranquilidad que imaginó Lavagna luego del acuerdo con el Fondo fue una ficción. El FMI actúa a cuenta de otros acreedores y grupos capitalistas que exigen interminables concesiones.

Hasta ahora el gobierno norteamericano es el mayor beneficiario de esta situación, porque debería hacerse cargo de la recapitalización del FMI si la Argentina declarara su default con esa institución. Por eso Bush elogia a Kirchner y aprovecha que los bancos norteamericanos se desprendieron de los títulos argentinos o contabilizaron la pérdida a cambio de otras ventajas. Pero los momentos de luna de miel con el establishment estadounidense nunca han sido duraderos. Ellos suelen aplaudir o insultar a sus interlocutores en función de las conveniencias del momento y por eso, el despectivo maltrato que predominó hasta el año pasado podría reaparecer en cualquier momento.

Esta hostilidad apuntaría a que el país amplíe el monto de los pagos. La expectativa de mantener apagado el conflicto con los organismos mientras se negocia con el resto de los acreedores es completamente infundada. El FMI esquilma las divisas del país y mantiene un chantaje sostenido. En las fases recesivas exige pagos para favorecer el “retorno de los inversores” y en los períodos de reactivación reclaman el cumplimiento inmediato de todos los compromisos. Siempre hay que pagar más. Si el “país está en llamas” para atenuar el incendio y si la economía crece para demostrar que “se respetan los contratos”. En estas condiciones la reactivación no permite un respiro, sino que se convierte una pesadilla adicional.

El gobierno norteamericano es el principal agente de los acreedores y defiende esos intereses con argumentos de ocasión. Por ejemplo, al mismo tiempo que le exige a la Argentina el pago de su inmensa deuda, promueve que el pasivo de Irak con Europa sea declarado “odioso”. De esta forma, el gobierno títere de los marines podría dilapidar el gasto público en el sostenimiento financiero de los invasores. Pero ese doble parámetro para definir conductas de los deudores olvida que el pasivo argentino es tan

“odioso” como la iraquí, porque se gestó bajo una dictadura mediante autopréstamos y seguros de cambio, que posteriormente fueron incrementados con sucesivas renovaciones de bonos, para cubrir déficits fiscales que solventaron la fuga de capitales y los subsidios a los grupos empresarios. Por ejemplo, solo desde mayo del 2002 hasta la actualidad la deuda saltó de 114.600 millones a 178.000 millones de dólares. En lugar de repudiar esta estafa, el gobierno negocia aceptando la legitimidad del fraude.

NI MISERIA EXPLICITA, NI MISERIA ENCUBIERTA.

El segundo grupo de acreedores privilegiados aglutina a los bancos y empresarios nacionales que recibieron bonos emitidos después del default. Un 26% de la deuda que se paga (84.400 millones de dólares sobre 178.800 millones totales) se canaliza a través del principal título de estas emisiones (Boden). Los más favorecidos por este cobro son los bancos que confiscaron a los pequeños ahorristas y las grandes empresas beneficiarias de la devaluación o la pesificación.

Lavagna ha sido fiel a su origen en el gobierno de Dhualde y al mandato de Mendiguren y Remes, al apuntalar a los grupos que más lucraron con el fin de la convertibilidad. Quiénes tanto se esfuerzan por demostrar el “cambio de modelo” deberían constatar la continuidad de este subsidio estatal. El establishment elogia a Lavagna no solo por la recuperación de los negocios, sino también por la preservación de los privilegios de cobro que tienen los grandes grupos locales. Por eso las cámaras empresarias ponderan el superávit fiscal, ya que ellos se han ubicados en la ventanilla de cobro de una cuenta que paga el conjunto de la población. Los economistas heterodoxos suelen argumentar que la “deuda post-default es distinta” y debe ser pagada sin ningún atraso. Pero no brindan ninguna explicación de esta obligación, porque el pago simplemente obedece a la estrecha asociación que mantienen el gobierno con los capitalistas locales.

Por el momento la cesación de pagos solo afecta a los tenedores extranjeros de títulos. El 44% de estos acreedores son pequeños ahorristas (especialmente italianos, japoneses, holandeses y alemanes) que fueron inducidos por los bancos a adquirir los riesgosos bonos argentinos. Estas entidades deberían hacerse cargo de las pérdidas de sus clientes y no el estado nacional, que ha sido financieramente asfixiado por los mismos usureros. El gobierno rehuye este legítimo planteo porque sería inadmisibles para sus interlocutores del FMI. Por eso ha propuesto una quita del 75% o la emisión de nuevos bonos de más largo plazo, menor interés o mayor rendimiento asociado con la tasa de crecimiento.

Cualquiera de estas alternativas exigirá tremendos sacrificios a la población, porque suponen un horizonte indefinido de superávit fiscal. La perspectiva de sacrificios populares es inmensa con una quita del 75%, del 60% o del 40% (según se calcule el valor efectivo de los bonos) o con la emisión de nuevos títulos que amplifiquen el monto adeudado.

Por el momento rige un “bolsillo único” del 3% del PBI para pagarle a todos los acreedores, pero este porcentaje estará sujeto a las negociaciones

que año tras año realice el país para actualizar sus compromisos de pago. Después de lo ocurrido el 20 de diciembre del 2001 ya ningún funcionario se atreve a declarar que se “pagará con el hambre del pueblo”, pero silenciosamente están imponiendo ese sacrificio. Solo en concepto de comisiones, el grupo de banqueros intermediarios que negocia una salida al default se embolsará una suma cercana a los 200 millones de pesos.

El gobierno enmascara esta tratativas desplegando un gran arsenal de hostilidad discursiva contra los sectores marginales del campo acreedor. Los “fondos buitres” -que se especializan en adquirir títulos públicos de países en bancarota para luego demandar su cobro nominal en los tribunales internacionales- son especialmente atacados. Pero el margen que tienen estos especuladores para embargar activos del estado argentino en el exterior es muy estrecho. Además, el daño que pueden causar al país es irrelevante en comparación a los planes de ajustes que impone el FMI y sus socios locales. La ira gubernamental está premeditadamente concentrada en los pequeños secuaces de la estafa para encubrir los compromisos suscriptos con los grandes depredadores.

Los funcionarios emiten mensajes sobre la deuda especialmente adaptados a cada auditorio. Mienten cuándo afirman que “el ajuste se terminó”, pero se sinceran cuándo piden disculpas a los acreedores. En este último caso el canciller Bielsa se ha olvidado que la solicitud de perdón debería ser inversa: de los banqueros hacia la mayoría del país.

También el periodismo dócil suele acompañar al gobierno ponderando “el papel pedagógico” las frases altisonantes de Kirchner en los foros internacionales. Esta retórica enmascara que los 12.500 millones de pesos que este año se destinarán al pago de la deuda obligan a mantener salarios miserables, en una coyuntura de alto crecimiento y excepcional saldo comercial.

Presentando a estas transferencias como un dato inamovible de la realidad se ha planteado un falso debate sobre como la utilización del excedente del superávit fiscal que ha generado la reactivación. Los ortodoxos propugnan realizar mayores pagos de la deuda, reducir impuestos al patrimonio o formar un fondo de reserva para afrontar la próxima recesión. Los heterodoxos, en cambio, promueven la inversión o alguna mejora del salario. Los defensores del gobierno –que se ubican en el segundo campo- pretenden demostrar que esta disputa constituye una divisoria de aguas entre los progresistas y los conservadores. Algunos funcionarios incluso ya promueven distintas maniobras políticas, para convertir en una “causa nacional” el apoyo al acuerdo del FMI contra la opción de mayores pagos.

Pero este escenario plantea una falsa disyuntiva, porque el excedente en discusión es completamente insuficiente para comenzar a resolver la tragedia de desempleo, pobreza y retracción salarial. Mientras que el 3% del PBI representa una cifra significativa para recomponer el ingreso popular, el excedente del superávit es una monto pequeño y de evolución incierta. La miseria explícita que propugna la ortodoxia y la miseria encubierta que promueve la heterodoxia son dos variantes de una misma política

antipopular. La real alternativa es utilizar todo el superávit fiscal para necesidades prioritarias de la población.

Para lograr ese excedente se está forzando un sacrificio popular inmenso, ya que el 3% comprometido supera el 2,5% logrado el año pasado y se ubica muy por encima del “déficit cero” de Cavallo. Además se sitúa en las antípodas del déficit fiscal que actualmente prevalece en todas las economías desarrolladas a fin de contrarrestar las tendencias recesivas.

Por otra parte, el superávit del 3% está destinado a reembolsar una deuda que ya pagada y abusivamente refinanciada. Se estima, por ejemplo, que la carga de intereses adosada a la deuda argentina entre 1990 y 2001 (93.900 millones de dólares) fue semejante al total de créditos otorgados por Estados Unidos a Europa a través del Plan Marshall. Por eso lugar de solicitar una nueva versión de este programa de expansión imperialista para el país o Latinoamérica correspondería simplemente reclamar que no se lleven más dinero. La Argentina no necesita nuevos préstamos, sino la cesación del pago del pasivo. Al rechazar esta perspectiva, el gobierno lejos de “negociar con dignidad” condena a millones de argentinos a un ajuste perpetuo. Suspender el pago de la deuda, revisar inmediatamente su administración y reasignar el uso de los 12.500 millones de pesos de superávit en función de las necesidades sociales prioritarias es el punto de arranque de un programa alternativo.

PRESUPUESTO DEL FMI E IMPUESTOS AL CONSUMO.

La subordinación de la política económica al FMI se verifica en presupuesto 2004, que ha sido rigurosamente amoldado al superávit acordado con los acreedores. Los legisladores no solo aprobaron estos condicionamientos, sino que ratificaron la delegación de poderes a Lavagna para que el ministro pueda introducir sobre la marcha todos los cambios que impongan las tratativas con los banqueros. Con esta finalidad se prorrogó la ley de emergencia económica y se introdujeron disposiciones que permiten al Ejecutivo modificar partidas o manejar discrecionalmente los fondos públicos.

La prioridad asignada al pago de la deuda se verifica a simple vista comparando los 9000 millones de pesos destinados a los acreedores (hay que añadir otros 3000 de la recaudación provincial) frente a los 2.500 millones asignados a Desarrollo Social, los 3.600 millones que recibe la educación o los 1.500 millones que se aprobaron para salud. Está prevista, además, una caída del 7% del gasto público real en salarios y un recorte del 2,7% de las jubilaciones.

La meta del superávit fiscal para pagar la deuda comenzó a ponerse en práctica el año pasado mediante la subejecución forzada de los gastos programados. Con esta forma brutal de ahorro se preparó un escenario de acostumbramiento a la estrechez presupuestaria. Siguiendo el esquema de retraer el gasto público social a un piso histórico se elaboró la pauta vigente para el año en curso. El objetivo del gobierno es cumplir primero con la meta

del 3% y lograr (si resulta posible) un excedente adicional para pagos suplementarios de la deuda, gastos asistencialistas o concesiones sociales.

Como la recuperación económica expandió la recaudación por encima de lo previsto ese excedente ya existe y el gobierno lo mantiene en caja calculando que el uso político que brindará a este adicional. Pero este incremento se ha logrado por el efecto cíclico del repunte económico, en un cuadro tributario invariablemente regresivo. La gran masa de consumidores empobrecidos solventa con el IVA este ensanchamiento de la recaudación y el gobierno celebra esta holgura, ocultando que el excedente se origina en un el virulento recorte del gasto social y en el predominio de los grandes impuestos indirectos.

Los economistas ortodoxos y heterodoxos ya discuten el eventual destino de la recaudación adicional, sin mencionar la necesidad de modificar la regresividad tributaria. Afirman que “no es el momento para hablar de reformas fiscales en plena reactivación”, pero no explican porqué rechazan también este cambio en las coyunturas recesivas. Evidentemente, su rol es defender las ganancias de los empresarios en cualquier fase del ciclo económico.

Pero no solo el IVA se mantiene en el 21 %, sino que además persiste la total desgravación de las operaciones financieras y bursátiles y ni siquiera se ha considerado incrementar las retenciones a la exportadores de soja, que acumularon inesperados beneficios por 2500 millones dólares como consecuencia del aumento del precio internacional de este producto (de 137 dólares la tonelada en julio a 207 dólares en enero). En la agenda tributaria del gobierno solo figuran los temas que plantea el FMI (modificar la coparticipación federal), los bancos (anular el impuesto al cheque) o los industriales (desgravar las inversiones).

Para eliminar la miseria y recomponer los ingresos populares hay que iniciar el camino opuesto de una drástica reforma fiscal progresiva. Esta transformación -y no el sobrecumplimiento del superávit fiscal- brindaría el soporte para revertir el genocidio social que soporta la Argentina.

RECUPERACIÓN CÍCLICA Y CRECIMIENTO EXCLUYENTE.

El crecimiento del 8% que se registró durante el 2003 superó las previsiones oficiales y el incremento del 5-6% esperado para este año se ubica también por encima de los cálculos iniciales. La reactivación centrada al principio solo en el boom exportador que generó la devaluación y los altos precios internacionales de las materias primas se afirmó posteriormente con la sustitución de importaciones y la recuperación del consumo (principalmente de altos y medianos ingresos).

Pero este rebote de la mayor depresión de la historia argentina no constituye un dato sorprendente. El repunte del PBI no es un resultado del “cambio el modelo”, sino del comportamiento fluctuante de la acumulación capitalista y la magnitud del desplome precedente. Si se tiene en cuenta que la depresión se extendió durante cuatro años y culminó en el 2002 con una insólita caída del 10%, la reactivación constituye una reacción cíclica frente

ese derrumbe, apuntalada por la coyuntura internacional de altos precios de las materias primas que exporta el país. El entusiasmo de muchos economistas carece de justificación, si se toma en cuenta que manteniendo el ritmo actual de crecimiento recién en el 2005 se recuperarían los niveles de producción vigentes en 1998.

Los ciclos de recesión y prosperidad han sido particularmente bruscos en las últimas dos décadas. Basta recordar el intenso crecimiento de que siguió a la hiperinflación para notar que el repunte en curso no es excepcional. Incluso es prematuro evaluar cual será su intensidad en comparación a otros rebotes en países que soportaron fuertes recesiones en los últimos años (Rusia, Corea del Sur, Malasia, México).

La dependencia del ciclo económico argentino de la coyuntura financiera (afluencia o salida de capitales) y comercial (precios y volúmenes de venta de las exportaciones) internacionales se acrecienta año tras año. En este plano lo que ocurre se asemeja al curso general de Latinoamérica. En esta región se está registrando actualmente una reactivación basada en la alta cotización de varias materias primas (soja, petróleo, cobre) y el ingreso de fondos que no encuentran colocación rentable en los países avanzados, dada la sostenida caída de las tasas de interés.

Pero también la retracción de la inversión extranjera directa que afecta a Latinoamérica se extiende a la Argentina. Aunque han reaparecido en el país grandes oportunidades de negocios, solo una escasa porción de la enorme masa de capitales depositados en el exterior ha reingresado al circuito local. El año pasado persistió el balance negativo de divisas y el grueso del superávit comercial se evaporó en fugas de capital.

Además, la experiencia de la convertibilidad indica que lo relevante no es la intensidad sino la forma de crecimiento y aquí está a la vista el carácter socialmente regresivo del modelo en curso. Con 60% de pobres, 20% de desempleados y 44 % de trabajadores informales, la gran mayoría de la población no participará de los frutos de la reactivación.

La recuperación tampoco tiende a revertir la desindustrialización y la reprimarización padecidas durante las últimas décadas. Al contrario, la "sojadedependencia" está extendiendo la fractura social al terreno agrario, ya que en plena euforia exportadora los pequeños productores no han podido cancelar las deudas y por eso continúan hipotecadas más de un millón de hectáreas. El predominio de un monocultivo transgénico -que anula la diversidad de agrícola y facilita el control transnacional del abastecimiento de semillas- provocó entre 1992 y 2001 la desaparición de 150.000 pequeños productores y una creciente concentración de la propiedad de la tierra cultivable.

Pero el dato dominante de la reactivación en el corto plazo es la recomposición de las ganancias del conjunto de la clase capitalista. No solo los ganadores iniciales de la devaluación y la pesificación obtuvieron beneficios mayúsculos, sino que todos los grupos empresarios actualmente exhiben altos rendimientos. Basta observar los balances que a fines del año pasado presentaron las firmas siderúrgicas (Siderar, Acindar), petroleras (Repsol, Petrobrás), privatizadoras (Telefónica, Telcom, Edenor, Central

Puerto) o vinculadas al mercado interno (Loma Negra, Grimoldi) para notar la magnitud de estas ganancias capitalistas. Son lucros extraordinarios logrados sin riesgo, ni inversión y que deberían ser afectados por un impuesto especial tendiente a reorientar la reactivación hacia el consumo popular.

CONTINUIDADES, CAMBIOS Y ALTERNATIVAS.

Muchos economistas favorables al gobierno estiman que el “modelo cambió”, porque difiere de la convertibilidad o la aperturas predominantes en los 90. Pero conviene recordar que el primer Cavallo tampoco “fue igual” al segundo y que Machinea era distinto a Roque Fernández. Lo importante no es constatar la presencia de otra cara al frente del Ministerio de Economía, sino evaluar la envergadura del cambio. Y aquí salta a la vista que el modelo de bajos salarios, alto desempleo, consumo segmentado e inversión primarizada se mantiene invariable. Las numerosas modificaciones que siguieron a la devaluación no alteraron este regresivo perfil.

Los cambios efectivamente registrados involucran en primer lugar al discurso, porque la rebelión popular obligó a las clases dominantes a enmascarar la continuidad de su política con una retórica antiliberal. En segundo término, se afianzó el rol de Lavagna como árbitro de los distintos grupos empresarios, en un marco de nuevas hegemonías al interior del bloque dominante. Los acreedores que cobran (organismos internacionales y grupos locales) tienen más peso que representantes de los sectores en default y la influencia de los exportadores es mayor a de las compañías privatizadoras. La confesión de Lavagna (“en la Argentina se registró la devaluación más exitosa del mundo”) retrata claramente a quiénes privilegia el gobierno. Pero como la reactivación beneficia actualmente a todos los capitalistas, las fronteras entre grupos ganadores y perdedores han quedado diluidas. Por eso, hasta ahora, todas las asociaciones patronales compiten en elogios al gobierno.

En este marco de satisfacción capitalista persisten las tensiones en el plano cambiario entre los acreedores que quieren reevaluar (para cobrar más en divisas) y los exportadores que insisten en devaluar (para realizar ventas externas más jugosas). También existen disputas en la esfera fiscal para dirimir a quién asignar el excedente del superávit y persisten choques en el terreno monetario, porque sostener con expansión la demanda interna favorece a los industriales y contraer la emisión beneficia a los acreedores. Las discusiones entre ortodoxos y heterodoxos expresa en gran medida los intereses que separan a los bancos y las privatizadoras frente a los exportadores e industriales.

Para justificar el apoyo a Lavagna, algunos heterodoxos realzan las críticas del oficialismo al neoliberalismo y recuerdan que recibió “una dura herencia”. Pero se olvidan que el ministro se antecedió a sí mismo y por lo tanto es responsable de su propio legado. Por otra parte, gran parte de su equipo ocupó altos cargos durante la convertibilidad (Gerchunoff, Redrado).

Otros economistas aplauden a Lavagna “por haber evitado lo peor” (hiperinflación, dólar a 10 pesos). Pero los principales beneficiarios de este alivio son los grandes grupos capitalistas. Para la mayoría de la población empobrecida “lo peor sucedió” antes y después de la devaluación. El piso que encontró el ciclo depresivo resucita ahora las ganancias de una minoría enriquecida, sin haber revertido los padecimientos populares.

Algunos economistas reconocen la perdurabilidad de esta tragedia social, afirmando que “la agenda social está pendiente”. Pero no dicen cuánto tiempo habrá que esperar para abordarla. En realidad esperan una recomposición del empleo o del salario en el largo plazo y apuestan a mientras tanto varias generaciones pauperizadas aguanten sin protestar su destino de miseria.

Para los integrantes del EDI esta resignación es moralmente inadmisibles y por eso en lugar de celebrar los beneficios capitalistas ocultando los sufrimientos del pueblo proponemos un programa basado en la recuperación inmediata del poder adquisitivo de los trabajadores, desocupados, jubilados y otros sectores populares. La financiación de este proyecto se apoya en tres pilares: los fondos surgidos de la cesación del pago de la deuda, el dinero proveniente de la reforma fiscal progresiva y las sumas resultantes de un impuesto extraordinario a las ganancias recientemente obtenidas por los grandes grupos empresarios.

SEGURO UNIVERSAL DE ALIMENTACIÓN Y EDUCACIÓN.

La primera medida de un programa económico popular es la implementación de un seguro universal que brinde alimento y educación a toda la población. Como la canasta básica de alimentos (CBA) se ubica en 327 pesos garantizar este mínimo a toda los habitantes constituye el punto de partida de cualquier proyecto que pretenda revertir el desastre social. Esta suma debería ser complementada con una asignación de 45 pesos por hijo para que cada familia pueda también solventar los gastos educativos más elementales.

Instaurar este seguro –que muchas organizaciones popularizan en torno a los 380 pesos- es indispensable para que el derecho a alimentación se convierta en una realidad. Comer normalmente es indispensable y no debe depender de la eventualidad de uno u otro empleo. Es un derecho a la vida que debe ser garantizado a través de un subsidio universal. La ausencia de este derecho en un país como la Argentina -que es el quinto exportador mundial de alimentos- es particularmente inadmisibles.

Urge implementar este seguro, porque desde la devaluación el aumento los precios aumentaron 46,7% pero la suba de los productos alimenticios para el hogar alcanzó el 74,9%. Por eso se estima que la dieta actual del 35% de la población es insuficiente y algunos especialistas detectan el surgimiento de una nueva generación de “petisos sociales”, es decir de individuos cuya estatura decrece por el efecto acumulativo de la desnutrición.

El seguro permitiría eliminar inmediatamente la indigencia que afecta al 25% de la población y debería reemplazar el plan de Jefes y Jefas de Familia, para que un mecanismo universal sustituya la arbitrariedad del sistema vigente. El seguro no debe depender de la buena voluntad de los funcionarios, ni de los cálculos de los punteros.

El gobierno rechaza la implementación del seguro porque destina los recursos que lo financiarían al pago de la deuda. Pero además, la universalidad del sistema le quitaría el gran instrumento de clientelismo que habitualmente disputan las fracciones del Justicialismo. En la pelea por este control, la Ministra Alicia Kirchner está concentrado en sus manos el manejo de los subsidios para restarle poder a los intendentes y a los consejos consultivos. Por eso mantiene cerrada la inscripción y ha realizado una violenta depuración de padrones, cuando más bien correspondería ampliar el número de beneficiarios a todos los inscriptos. Esta manipulación apunta a debilitar al combativo movimiento piquetero y a resucitar el viejo poder de los punteros locales. También se intenta manejar el sistema a través de una tarjeta que apuntalaría los negocios bancarios de intermediación.

El gobierno se opone al seguro universal, porque introduciría un serio obstáculo a las presiones patronales para mantener achatado el salario. Si todas las familias tuvieran asegurados los 380 pesos, nadie trabajaría por una cifra inferior a ese piso.

Mantener en la miseria absoluta a una gran parte de la población es un objetivo premeditado de los sectores patronales más reacios a cualquier recuperación del salario. Por eso la derecha está empeñada en una intensa campaña contra la “vagancia de los desocupados”. El gobierno se hace eco de estas presiones e impulsa la conversión de los planes actuales de 150 pesos en subsidios a las empresas que contraten desocupados. Esta iniciativa -junto a las “contraprestaciones laborales” que pretende supervisar el Banco Mundial – va a contramano de un seguro universal.

Cualquier logro parcial en la dirección de este objetivo constituiría una conquista popular. Pero estos posibles avances no deben encubrir la persistencia de la miseria. Obtener por ejemplo una asignación por hijo de 45 pesos no resuelve la imposibilidad de alimentar a la familia con los 150 pesos de los planes actuales. No hay que perder de vista que el dinero para el seguro está en las arcas oficiales, mientras se mantiene un perverso endeudamiento con el Banco Mundial, que financia los planes y luego exige su recorte para cancelar los préstamos adeudados.

El cálculo es muy sencillo. Si al número actual de preceptores de los planes (entre 1,8 y 2,2 millones de personas) se le añade los inscriptos sin planes (900.000) y se estima un seguro promedio de 380 pesos, se requerirían 9500 millones de pesos adicionales para garantizar su implementación. Este destino constituye la primera prioridad del fondo constituido por la cesación del pago de la deuda, la reforma fiscal y el impuesto de emergencia a las ganancias empresarias.

CUATRO VÁS PARA CREAR TRABAJO GENUINO.

Lavagna intenta maquillar las cifras del desempleo buscando que el INDEC publicite los datos que imagina el ministro. Por eso se empeña en clasificar como empleados a los preceptores de los planes de Jefes y Jefas y llegó a anunciar el porcentaje de desocupados había caído al 14,3% cuando la estadística oficial lo sitúa en el 20,3%.

Pero el gobierno sabe que la población ya experimentó la falacia del “derrame” y por lo tanto no es fácil resucitar la creencia que “el empleo llegará con el crecimiento”. Los propios anuncios gubernamentales ilustran la inconsistencia de este mito porque de acuerdo a los cálculos oficiales, el año pasado con la reactivación record del 8 % solo se pudieron eliminar 80.000 subsidios de desempleo sobre un universo de 2 millones de parados. La insignificancia de este cifra confirma las débil relación entre ocupación y aumento del PBI que caracteriza actualmente al capitalismo y que afecta en forma más aguda a la Argentina.

Se estima que si la tasa de crecimiento se mantiene elevada (5-6% anual), la desocupación solo caería del 21,3 al 18 % (del 16% al 13% si no se computan los planes de Jefes y Jefas) sobre el fin del mando de Kirchner (2007)). Una proyección de más largo plazo que realizaron los técnicos de la OIT indica que se necesitarían por lo menos 20 años de crecimiento muy sostenido y parejo para revertir la brutal destrucción de empleos que provocó la depresión. En una economía periférica y dependiente, los ciclos de reactivación no reconstruyen el nivel de ocupación al mismo ritmo que una economía central e industrializada. La elasticidad del empleo en relación al producto (el aumento de la primer variable en proporción al incremento de la segunda) se ha contraído sensiblemente en la Argentina, al cabo de varias décadas de reprimarización.

Esta terrible perspectiva de desempleo crónico tampoco podrá revertirse con la simple multiplicación de los “emprendimientos productivos”, que algunos funcionarios presentan como el remedio inmediato al desempleo. Estas iniciativas solo constituyen formas de supervivencia elemental, que la población ha puesto en práctica con enormes esfuerzos para contar con algún ingreso adicional. Los pequeños talleres textiles y de calzado o las huertas que se expanden en distintas zonas han sido montadas en forma cooperativa por los propios desempleados sin ningún auxilio oficial. Pero enfrentan terribles obstáculos para seguir adelante cuando deben competir con los grandes empresas. Los emprendimientos no tienen crédito, ni medios de transporte y tampoco cuentan con redes de comercialización. Solo recientemente el gobierno comenzó a publicitar algún tipo de subvenciones, pero discrimina la aprobación de cada proyecto para favorecer a sus aliados políticos.

Por otra parte, el total de fondos comprometidos para esta actividad no supera hasta el momento los 90 millones de pesos, es decir un monto irrelevante para apuntalar a la pequeña de producción. Tampoco se han dispuesto compras estatales del sector, ni leyes que permitan contrapesar el monopolio de las grandes empresas en este ámbito. Muchos funcionarios simplemente buscan controlar los emprendimientos para que los desempleados trabajen por 150 pesos, sin convenio, ni obra social.

El drama de la desocupación no se resuelve con el aumento espontáneo de la demanda laboral privada, ni con la multiplicación de los emprendimientos. Estas dos fuentes de recomposición del empleo solo podrían cumplir un papel positivo si complementan la recreación centralizada del trabajo genuino, a través de las cuatro vías que debería contener una nueva legislación de empleo.

El punto de partida es el cumplimiento estricto de la 8 horas como primer paso hacia la progresiva reducción de la jornada laboral, a fin de multiplicar el empleo repartiendo las horas de trabajo. Es evidente que la falta de trabajo que padecen los “excluidos” constituye la contracara del sobreempleo que soportan los “incluidos”, ya que la jornada de trabajo en el país (2000 horas anuales) supera la media vigente en EEUU, Europa, Brasil o México. Con la reimplantación de las 8 horas se podrían crear inmediatamente 900.000 puestos de trabajo.

En segundo lugar se impone la puesta en marcha de un plan de obras públicas centrado en la construcción y financiado con los tres recursos del programa popular (deuda, reforma fiscal, impuesto de emergencia). Tomando en cuenta los cálculos que tradicionalmente se plantearon en este terreno podría estimarse que con 6000 millones de pesos se podrían crear 200.000 nuevos puestos de trabajo.

En tercer lugar debe legislarse un mecanismo de expansión del empleo en las empresas que registran altos rendimientos. Ya se demostró que “incentivarlas” a tomar trabajadores reduciendo las cargas sociales multiplica el quebranto fiscal sin mejorar la ocupación. Por eso hay que transitar el camino inverso y fijar pautas de ligazón de las ganancias con la creación de puestos de trabajo. Lejos de constituir una atribución exclusiva del empresario o del gerente, el problema del empleo deberían convertirse en un tema a resolver por el conjunto de la sociedad. Ya no es admisible presentar a los despidos como sinónimo de eficiencia, porque el objetivo del proceso económico deber ser justamente el inverso: crear y no destruir fuentes de trabajo.

Finalmente, el sostén estatal a los microemprendimientos debería alcanzar un volumen significativo. Los propios técnicos del Ministerio de Desarrollo Social estiman que en las actuales condiciones solo el 20% de estos proyectos se mantendrá en pie cuando tengan que enfrentar la competencia capitalista. Pero en otro marco económico y social signado por la expansión del trabajo genuino estos emprendimientos no estarían condenados al fracaso. Al contrario, podrían actuar como un gran estímulo para el desenvolvimiento de la producción.

UNA MEJORA SALARIAL INTEGRAL.

La inflación que siguió a la devaluación provocó un deterioro generalizados y desigual de los salarios. Los trabajadores informales fueron más golpeados porque el promedio de los sueldos en esta franja es de 313 pesos y el impacto de la carestía de los alimentos ha sido aquí demoledor. En este segmento se cobran sueldos miserables, no existen las jubilaciones, ni

vacaciones u obra social y se contrata o despide trabajadores violando todas las normas legales. Este universo abarcaba al 25% de la población laboral a comienzo de los 90, pero se ha expandido hasta el 45% del total en la actualidad. Como casi la mitad de los asalariados trabaja en estas condiciones, la pobreza afecta en la Argentina a la gran franja no solo a los “excluidos”, sino también a un gran segmento de los “incluidos”.

Poner fin a esta situación imponiendo la inscripción legal de todo individuo que trabaje es indispensable para comenzar a corregir la brutal dualización del mercado laboral. Sin esta incorporación al universo formal, cualquier medida oficial seguirá careciendo de efecto real y los pomposos anuncios de incremento del salario mínimo seguirán involucrando a lo sumo al 20% de los trabajadores.

Todos los gobiernos han mantenido una conducta hipócrita frente la informalidad, porque mientras impulsa costosas campañas publicitarias para que “todos se inscriban” auspicia leyes laborales que convierten a esta legalización en un telegrama de despido. Al mismo tiempo que convoca a los trabajadores a contribuir al blanqueo de su situación laboral se le quitan todos los instrumentos de protección para implementar este blanqueo.

Pero el objetivo de un programa económico popular no debería ser la legalización de la miseria actual, sino su reversión mediante un real incremento del salario mínimo. Este aumento fijaría un piso efectivo del ingreso para todos los trabajadores. Ese nivel no quedar en los 50 pesos establecidos por el gobierno, sino que debe situarse en los 716 pesos de la Canasta Básica Total (CBT). Este monto es el piso para emerger de la pobreza. Solo partiendo de esa cifra tiene sentido hablar de un “salario mínimo”, ya que cualquier suma inferior no cubriría lo necesario para el sostenimiento de una familia. Una vez introducido este piso se puede impulsar la paulatina reducción de la brecha que actualmente separa a los trabajadores informales de los legalmente inscriptos.

En este segundo sector, el promedio salarial actualmente se ubica en 718 pesos. Aquí el deterioro posdevaluación fue moderado por el otorgamiento de distintas compensaciones. Se estima que en promedio la caída salario en este segmento de trabajadores privados formales oscila desde fines del 2001 en torno al 20%. Pero por otra parte, en este campo se registraron incrementos de productividad que las empresas absorbieron integralmente. Por esta razón el costo salarial se ubica en la actualidad en el nivel más bajo desde 1990.

En un tercer sector de empleados estatales, el salario se ha mantenido estrictamente congelado por exigencia del FMI. El programa de superávit fiscal se sostiene justamente es esta pauta restrictiva, que no ha sido modificada ni siquiera luego de la aparición de los excedentes sobre ese excedente. Algunos funcionarios recurren al típico argumento de comparar con el más empobrecido para justificar este congelamiento y sostienen que el promedio de los salarios públicos es superior a la media de los privados. Pero en vez de concluir de esta constatación la necesidad de incrementar los sueldos en el segundo sector proponen convalidar la contracción vigente en el primer segmento.

Un programa económico popular centrado en la recomposición del poder adquisitivo requiere la inmediata sanción de incrementos salariales del 20 % en la franja privada y del 30% en el sector público. Con estos incrementos solo se compensarían las pérdidas registradas desde la devaluación y no el deterioro estructural que se acumula desde mediados de los 70. Solo a partir de estas mejoras la reactivación del consumo abarcaría al conjunto de la población.

La recomposición de los ingresos populares debe involucrar de manera conjunta y simultánea a todos los segmentos de la población oprimida: los desempleados, los trabajadores informales, los asalariados inscriptos y los empleados públicos. Cualquier contraposición entre estos cuatro sectores introduce falsas antinomias. La crisis económica no se resuelve mejorando la situación de los indigentes a costa de los pobres, ni de los trabajadores de las empresas privadas a costa de los empleados estatales.

Es falso que “no hay dinero para todos”. Existen recursos suficientes, si se dispone la cesación del pago de la deuda, se introduce una reforma fiscal progresiva y se gravan las ganancias extraordinarias recientes de las grandes empresas. No hay que conspirar contra la unidad de los desocupados, los asalariados y la clase media difundiendo la tesis oficial de privilegiar a un sector contra el otro. Una reactivación perdurable basada en la recomposición del poder adquisitivo requiere la interacción conjunta de estos tres sectores.

CONVALIDACIÓN DE LA FLEXIBILIDAD LABORAL.

El efecto positivo de cualquier mejora salarial quedaría completamente neutralizado en el marco de actual ausencia de protecciones laborales. Por eso el impacto de los recientes incrementos oficiales del salario mínimo ha sido tan insignificante. Cuando los funcionarios afirman que estos incrementos elevan el piso salarial, omiten que la desprotección absoluta de los informales y las normas de flexibilización imperantes en el circuito formal diluyen el impacto de ese aumento. La recuperación del poder adquisitivo exige la inmediata anulación de las normas desreguladoras introducidas bajo el menemismo y la Alianza.

No basta con la derogación de la “ley banelco”, ya que en este caso los convenios suscriptos durante su vigencia quedarían en pie. Cualquier cambio legislativo será ineficaz si se mantienen vigentes las contrarreformas que eliminaron los derechos de los trabajadores. Por el momento solo ha cambiado el tono de los discursos oficiales, mientras subterráneamente la flexibilidad laboral continúa avanzando. En los últimos meses, más de 75 convenios con cláusulas desreguladoras (12 horas de trabajo, rotación de puestos, fraccionamiento de las vacaciones) fueron homologados por el Ministerio de Trabajo.

Pero el dato más categórico del perfil laboral predominante es el tipo de empleos que se está creando al compás de la reactivación. Se estima que 7 de cada 10 puestos de trabajo surgidos desde el año pasado son precarios.

Esta creación amplía el segmento de la informalidad e incrementa la gravitación de las actividades mal remuneradas y poco calificadas.

Un indicador contundente de este afianzamiento de los “empleos basura” es la tasa de accidentes, que en el primer semestre del año pasado aumentó un 17% en el sector formal y probablemente el doble en la esfera informal. Este porcentaje de siniestralidad –que es muy superior al incremento del ritmo de actividad- revela el bajo costo que actualmente tiene para los empleadores el deterioro físico de sus empleados. Por eso los accidentes laborales se cobran 3 muertes por día, sin que esta tragedia motive comentarios, denuncias o preocupaciones significativos en la gran prensa.

Este terrible panorama de explotación no se revierte sustituyendo la corrupta “ley banelco” por una legislación transparente, que solo introduzca cambios menores a la flexibilización actualmente imperante. Es cierto que una ley no basta para modificar la realidad social del control patronal del proceso de trabajo, pero este dominio puede atemperarse bajo el impacto de la presión obrera. La nueva ley laboral que propone el gobierno no apunta hacia esta dirección, porque permite que los capitalistas sigan atropellando a los trabajadores.

En el proyecto oficial se tolera la anulación de las 8 horas, se avala el faccionamiento de las vacaciones, se mantiene el “procedimiento de crisis” (que permite a las patronales desconocer los convenios en las “situaciones de emergencia”), se preserva el sistema actual de insignificantes coberturas frente a los riesgos laborales (ART) y se legitiman los “períodos de prueba” que conspiran contra la estabilidad laboral. Pero, además, la nueva ley refuerza el nefasto mecanismo de subsidio a las empresas creado por el menemismo, para estimular la contratación de trabajadores mediante la reducción de los aportes patronales a la previsión social. Finalmente, aún no ha quedado resuelto si las normas más favorables tendrán preeminencia sobre las desfavorables en la aplicación de los convenios específicos. Cualquiera sea la “letra chica” final que adopte esta ley, es evidente que no revierte la flexibilización, ni favorece la reconquista de los derechos sustraídos a la clase trabajadora.

LOGOS Y DILEMAS DE LAS EMPRESAS RECUPERADAS.

Las 170 empresas recuperadas por los trabajadores ante el abandono patronal constituyen uno de los mayores logros de la resistencia popular. Estas fábricas han sido rescatadas al cabo de un duro proceso de lucha en todos los terrenos: contra los dueños que pretendían retomar la propiedad (en muchos casos vaciada), contra los jueces que exigieron el desalojo, contra las fuerzas represivas que atacaron a los operarios y contra los cortesanos del poder que calumniaron a los trabajadores.

En las empresas recuperadas se logró frenar esta arremetida capitalista y por eso las fábricas existen y están produciendo en todo el país. Aunque las formas de administración son variadas y existen proyectos divergentes sobre el futuro de estas compañías (cooperativismo,

estatización, control obrero), en la práctica casi todas funcionan bajo un régimen de gestión obrera directa. Este hecho tiene un enorme significado político porque indica que el manejo de cualquier empresa es factible sin la presencia de los patrones y sus gerentes.

Por esta razón aunque estas fábricas aglutinan un segmento muy pequeño del universo laboral plantean una perspectiva anticapitalista posible. Qué Brukman haya triunfado al cabo de 22 meses de dura resistencia, que Zanón funcione sorteando tantas presiones y que Sasetru se mantenga en pie confirman que la rebelión del 20 de diciembre ha dejado secuelas muy positivas.

Kirchner ha tomado nota del fracaso de la mano dura que Dhualde ensayó contra las empresas recuperadas. Por eso intenta desactivarlas por otra vía. Como no pueden ser devueltas a sus viejos dueños se intenta integrarlas al segmento actual de pequeñas y medias empresas (Pymes) alentando la participación de nuevos capitalistas en su administración. Este proyecto del Ministerio de Trabajo coexiste con el simple mantenimiento de estas empresas como cooperativas. En esta modalidad tenderían a soportar todas las dificultades financieras, productivas y comerciales que padecen estas asociaciones, especialmente cuando deben competir con las grandes empresas.

El gobierno nacional y las legislaturas provinciales o municipales han frenado la aprobación de leyes que contribuirían a sostener a estos emprendimientos. No se ha satisfecho el reclamo crediticio sustancial que hicieron estas fábricas (80 millones de pesos) y solo existe una oferta oficial de 6 millones de pesos. Tampoco se avanzó en compromisos de compra estatal de una parte de una producción. Los debates en las legislaturas giran en torno a aspectos parciales (modificación de la ley de quiebras, fideicomisos, etc) y los partidos mayoritarios han recurrido a todo tipo de dilaciones para evitar una ley que proteja y apunte a las empresas recuperadas.

Frente a estos obstáculos sería importante avanzar en la creación de un polo centralizador de todas las empresas bajo gestión obrera directa. Este aglutinamiento facilitaría la batalla para que las fábricas funcionen y produzcan en un horizonte anticapitalista. En algunos casos se mantiene abierta la batalla por la estatización y en otros predomina la exigencia de lograr la aprobación de un estatuto específico para estas empresas (por ejemplo, constituir una "Sociedad Obrera de Empresas Recuperadas"). Esta última iniciativa constituiría un gran logro jurídico, si contempla la propiedad social de las empresas (pertenencia exclusiva a los trabajadores sin aportes, ni derechos sobre el capital acumulado al momento del retiro) y un conjunto de normas sobre las utilidades (que deberían destinarse en su totalidad al desarrollo de las empresas) y salarios o escalas de calificación (que se definirían democráticamente en asambleas). Lograr conquistas en este terreno es vital, porque la consolidación de las empresas recuperadas tiene un gran significado político para el desarrollo de un programa popular de recuperación de la economía.

UNA SOLUCIÓN PARA EL FRAUDE PREVISIONAL.

El colapso del sistema previsional es una bomba de tiempo, cuyos devastadores efectos sociales saldrán a la superficie en los próximos años. El régimen está completamente vaciado ya que sobre un total de 11,5 millones de afiliados solo aportan 4,5 millones contribuyentes. Por un lado, la mitad de la población activa trabaja en negro y carece de cualquier protección jubilatoria y por otra parte, el fraude previsional se ha generalizado entre la masa de empresas no hacen aportes.

La agobiante miseria impide a la mayoría de los trabajadores autónomos cumplir con sus cuotas. El efecto de esta situación será la carencia total de jubilaciones para una de cada dos personas en edad de jubilarse en el año 2030. Pero además, quiénes si aportaron solo recibirán en promedio un 40% del haber que les correspondería cobrar.

Esta catástrofe previsional es consecuencia de la sustitución parcial del régimen único de reparto por el sistema individual de capitalización. La reforma de 1994 –que impuso la transferencia generalizada de contribuyentes hacia el segundo mecanismo- fue financiada por el estado a través de la reducción de los aportes patronales. Este traspaso determinó una erogación estructural de recursos que precipitó el derrumbe de las finanzas públicas. Se estima que esas transferencias totalizaron en una década 75.700 millones de pesos (o dólares). Por eso mientras que en 1993 la seguridad social se autofinanciaba, en la actualidad solo cubre el 60% de sus gastos.

Las AFJP recibieron durante ese periodo sumas descomunales de dinero sin ninguna contrapartida, ya que muy pocos contribuyentes de este sistema se han jubilado. Pero lo peor ha sido la administración comprobadamente fraudulenta de los fondos que manejan. Se apropiaron en concepto comisión del 30% de este capital, concretaron inversiones prohibidas y operaciones muy turbias al servicio de los administradores. Solo cuatro grandes bancos monopolizan el grueso de este negocio y nadie puede explicar porqué el rendimiento de la cuentas de capitalización es tan inferior a lo que cualquier individuo hubiera obtenido simplemente manejando su dinero a través de un plazo fijo.

En los últimos años el quebranto previsional se agravó porque las AFJP colocaron el grueso de sus ingresos en títulos públicos que el default ha desvalorizado abruptamente. Se ha entablado una ridícula discusión para dirimir si el culpable de esta quiebra fue Cavallo -que forzó esta colocación de bonos- o los gerentes de las AFJP, que primero aceptaron esa exigencia y luego de la devaluación eludieron la pesificación de los títulos, optando por demandar su redolarización.

La controversia es absurda porque durante los últimos años, la mayor parte de los funcionarios públicos y directivos privados pertenecieron a un mismo grupo que se turnaba en el ejercicio de ambas actividades. Cuando Lavagna culpabiliza de la quiebra a los gerentes acusándolos de “inútiles”, recrea una comedia de enredos para encubrir a sus propios colaboradores. El superministro Alberto Fernández fue uno de los creadores de las AFJP y la

mayoría de los legisladores del PJ fueron artífices de la introducción del sistema de capitalización.

Ahora los funcionarios intentan diluir sus responsabilidades en la creación de un régimen privado. Buscan enmascarar el colapso de un sistema que formalmente promovía contrarrestar la manipulación oficial de los fondos previsionales y cuyos activos están actualmente constituidos en un 76% por títulos públicos. La brutal desvalorización que han sufrido los bonos en cartera de las AFJP será ahora costada por los aportantes y no por los propietarios y gerentes de esas instituciones. La situación de esos afiliados es semejante a la que soportan los pequeños ahorristas extranjeros de bonos argentinos que fueron estafados por los grandes bancos. Lavagna les ha planteado una quita parecida del 75%, pero a fin de negociar un acuerdo porque el gobierno mantiene un estrecho vínculo de intereses comunes con los directivos de las AFJP.

Por un lado los gerentes pretenden preservar su negocio frente a la ira de los aportantes, mientras que el gobierno depende de las administradoras de pensión para su financiación. Por eso mientras despotrica contra las AFJP, Lavagna se comprometió con el FMI a utilizar hasta el año 2018 el 50% de los recursos de estas entidades para la reprogramación de la deuda. Este compromiso explica el pacto de impunidad que mantiene el gobierno con este nefasto grupo de financistas. Si no llegan a acordar el porcentaje de quita que solventarán los contribuyentes, los bonos actuales serán sustituidos por un nuevo título, que mantendrá inflado el capital de las AFJP hasta el momento que comience el pago efectivo de las nuevas jubilaciones.

El compromiso con las administradoras de pensión también apunta a frenar la perspectiva de un retorno masivo de afiliados hacia el régimen de reparto. Siguiendo las pautas que estableció el Banco Mundial se está elaborando una nueva reforma, que legitimaría la presencia de las AFJP, reduciendo las comisiones, pero manteniendo las cuentas individuales. El objetivo es preservar un mercado cautivo de aportantes, avalando la desvalorización ya registrada de los fondos y disuadiendo el abandono del sistema a través de la prohibición del traslado de las sumas acumuladas en el régimen de capitalización hacia el sistema de reparto. El gobierno se opone explícitamente a la reconstitución de un sistema universal y solidario porque apunta a segmentar las futuras jubilaciones en dos instancias: una jubilación básica de miseria solventada por el estado y un complemento dependiente del negocio de las AFJP.

Cualquier alternativa popular frente a este tenebroso porvenir exige anular el régimen vigente, reimplantando los aportes patronales a fin de recrear un sistema único, universal y autofinanciado. Hay que demandar a los responsables del quebranto la devolución de las comisiones acumuladas y conformar un sistema que apunte al pago del 82% del haber vigente a los actuales y futuros jubilados.

La financiación adicional para aumentar las jubilaciones debería surgir de los tres pilares señalados como recursos básicos de un programa popular: los fondos utilizados para el pago de la deuda, la reforma fiscal y los impuestos de emergencia a las ganancias recientes.

LUCROS PARA LAS PRIVATIZADORAS, PÉRIDAS PARA EL ESTADO.

En comparación al fanatismo privatizador de Menem y al simple continuismo de Duhale, el gobierno implementa una política más diversificada en el terreno de los servicios públicos. Impulsa la reestatización en un caso (control del espectro radioeléctrico), la reprivatización en dos sectores (Correo y Lapa-Dinar) y renegocia los contratos bajo amenaza de anular las licencias vigentes (Aguas, Aeropuertos). En otros segmentos renovó los contratos transfiriendo al estado los gastos de inversión (ferrocarriles y peaje), discute la letra chica del aumento tarifario que ya se ha puesto en práctica (electricidad y gas) y mantiene sin cambios el curso actual (petróleo).

Esta diversidad de orientaciones no se apoya en ninguna explicación. “Negociar caso por caso” es un simple postulado oficial, que los funcionarios implementan sin ninguna justificación lógica. Porqué en ciertos casos se debe aplicar un criterio y en otros el opuesto es un misterio que el gobierno considera innecesario develar. Convoca simplemente a confiar en la habilidad negociadora de Lavagna, como si el ministro actuara en representación de toda la población. Los legisladores han ratificado esta delegación de atribuciones, pero la opinión de los usuarios brilla por su ausencia. No hay audiencias públicas, ni consultas a los vecinos sobre el curso a seguir en el terreno de las privatizaciones.

El gobierno elude estas consultas porque conoce el clima de hostilidad que existe entre la población contra las empresas. Las últimas encuestas indican que 8 de cada 10 usuarios se oponen a la continuidad de las concesiones y en muchos casos prevalecen pronunciamientos contundentes a favor de la reestatización.

En este marco Lavagna busca desactivar esta oposición con maniobras y gestos que aseguren la perdurabilidad de un gran negocio capitalista. Por eso el gobierno maneja con tanta cautela la introducción de los tarifazos. Kirchner demoniza a ciertos concesionarios (correos, aguas) para mejorar las relaciones con otros (petróleo, gas) y las fuertes críticas que exhibe en público son completamente olvidadas en las sigilosas negociaciones con las compañías. El presidente es un experto en el ejercicio de este doble discurso y en la enunciación de duras declaraciones en el país, que se convierten en amigables comentarios en España o Estados Unidos. Mientras en las tribunas se afirma que “nada está resuelto en materia de tarifas”, en las cartas secretas enviadas al FMI aparecen las fechas de estos aumentos.

Todo el contorneo oficial apunta a ocultar la continuidad de la división neoliberal del trabajo que rige desde los 90 y que asigna los grandes negocios del sector público para las privatizadoras y las pérdidas o inversiones para el estado. Con algunos disfraces este criterio persiste en la actualidad. La concesión del Correo fue por ejemplo anulada porque su rentabilidad resultó muy inferior a la prevista y ahora los 1000 millones de

pesos del canon adeudado por el concesionario se mantienen en un limbo jurídico, mientras la intervención estatal busca candidatos para la reprivatización.

La anulación de otra concesión (Thales Spectrum) ha provocado una gran sorpresa mediática, porque el incumplimiento de los contratos constituye un comportamiento habitual en la Argentina. Pero el respeto de ciertas reglas comerciales básicas no es una medida favorable al pueblo, ni un acto que permita abaratar los servicios públicos. Es simplemente una condición para que el conjunto de los capitalistas puedan hacer negocios dentro del marco legal que manejan y que los favorece.

Pero incluso en este terreno el gobierno se maneja con un cauteloso pragmatismo para evitar que la revisión de algunas estafas derive en un reclamo generalizado contra las privatizaciones. Por eso necesita ocultar que los argumentos utilizados para revocar una concesión resultarían aplicables a la gran mayoría de las concesiones. La justificaciones expuestas para hacer caer el contrato de control radioeléctrico (es un sector estratégico, se registraron irregularidades, los informes de la auditoría sobre el manejo del servicio son negativos, los compromisos de inversión no se cumplieron) podrían recaer sobre cualquier otra empresa privatizada.

En lugar de resaltar estas contradicciones los economistas heterodoxos aplauden el pragmatismo gubernamental. Descalifican la “oposición simplista entre privatismo y estatismo” y se manifiestan “contra ambos extremos”. ¿Pero cuál es la conveniencia social de apuntalar esta ausencia de criterios y reivindicar la arbitrariedad del gobierno de turno?

Para implementar un modelo de reindustrialización y recomposición de los ingresos populares hay que recuperar el manejo y la propiedad pública de las empresas estratégicas. En este caso no se trata es una opción, sino de una necesidad. El dominio público directo de los recursos y de las actividades claves de la economía es vital, porque en estos ámbitos se definen los principales precios y los costos determinantes del proceso productivo. Especialmente en un país periférico y dependiente como Argentina este manejo público es vital para afrontar las presiones de las grandes multinacionales.

Algunos heterodoxos afirman que la propiedad pública es innecesaria si el estado logra capturar la renta de los recursos naturales esenciales como el petróleo y el gas. Pero hasta ahora la experiencia ha demostrado este dominio es impracticable con la privatización, porque los concesionarios conocen, manejan y manipulan los datos requeridos para discriminar la renta de la ganancia. En todo caso un sistema de control eficiente terminaría siendo más costoso e ineficaz que la apropiación pública directa.

COMO RECONSTRUIR LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

Brindarle carta blanca al gobierno para analizar los contratos “caso por caso” solo conduce a perpetuar los servicios actualmente costosos e inaccesibles para la mayoría de la población. En ciertas actividades como el agua la situación es dramática porque el incumplimiento de la concesión ha

dejado a millones de personas sin agua potable, ni cloacas, mientras la empresa se niega a invertir e intenta destinar sus ingresos a la cancelación de injustificables pasivos externos.

Esta misma ausencia de inversiones ha determinado una situación de latente colapso en el terreno eléctrico que sale a la superficie cuándo la reactivación incrementa la demanda. La carencia estructural de inversiones determina cortes de energía por el simple repunte de la producción, mientras que las tormentas desembocan en invariables apagones. Penalizar a las compañías con multas por estos descalabros no resuelve los problemas de los usuarios y apostar a que finalice la construcción de Yacyretá o Atucha II para incrementar el caudal energético equivale a reconocer otra vez que el estado se hace cargo de las inversiones. La pregunta es siempre la misma. Si las inversiones en represas, en centrales o en caminos las realiza el estado: ¿Qué sentido tiene mantener la privatización de los servicios?

La propia revisión actual de los contratos confirma que la anulación de las privatizaciones no exigiría ningún tipo de indemnización. Más bien deberían ser las concesionarias quienes deberían reparar el daño que provocaron en los últimos años, cobrando tarifas dolarizadas o remitiendo al exterior utilidades a cambio de irrisorias inversiones. La reestatización no supone volver al viejo manejo burocrático y mafioso de las empresas públicas, pero en este caso el remedio sería peor que la enfermedad. Hay que introducir una nueva modalidad de gestión democrática tripartita compartida por funcionarios, trabajadores y usuarios.

La prioridad de este programa es el sector que el gobierno mantiene bajo un total silencio: el petróleo. Kirchner preserva aquí una antigua asociación con REPSOL-YPF, que renueva en cada viaje a España. No hay que olvidar que varios de los hombre claves de su gobierno (Parrilli, Féllner, Gaviola) jugaron un papel definitorio en la venta a Repsol. El daño que provoca esta privatización al conjunto de la economía nacional es inconmensurable. La principal petrolera continúa liquidando en el exterior el 70% de las divisas obtenidas de la exportación, mientras lucra con la brecha existente entre el precio internacional (28 dólares) y el costo local de explotación (4 a 10 dólares). Solamente el año pasado el balance de REPSOL-YPF indicó 1.800 millones de dólares de ganancia.

Se estima que entre enero del 2000 y septiembre del 2003 el conjunto de las compañías de este sector facturaron 12.600 millones de dólares y reinvirtieron 4000 millones. Los 8.600 millones de dólares que se embolsaron constituyen un asuma más que suficiente para encarar un ambicioso plan de inversiones en todas las áreas deficitarias de los servicios públicos. El dinero que no puede autogenerarse en el terreno ferroviario, energético o del agua -manteniendo o reduciendo las tarifas actuales- podría obtenerse de esa renta petrolera. Si las empresas públicas son reorganizadas como un sector financieramente unificado sería factible una redistribución de este tipo de las inversiones.

Pero este programa requiere también la reconstrucción racional de los servicios que fueron destruido por el menemismo y que el gobierno actual está emparchando con acciones demagógicas o ridículas. La reactivación de

un “tren social” que transporta a los empobrecidos mediante agotadores viajes que el ómnibus realiza en pocas horas, solo convalida la segmentación de los servicios entre un sector eficientes disponible para los ricos y la clase media y otro segmento de unidad destartaladas para los pobres e indigentes. Con los fondos surgidos de la unificación financiera de los servicios públicos se podrían achicar esa brecha, poniendo en marcha un plan de modernización de los ferrocarriles, que apuntaría también hacia la reconversión de este medio para incrementar el transporte de cereales. Resulta posible rehabilitar toda la red y recrear los puestos de trabajo para avanzar en un modelo de servicios públicos baratos y eficientes.

EL INTERMINABLE SOCORRO DE LOS BANQUEROS.

De manera sigilosa y bajo la cobertura de las polémicas con los acreedores, administradores de pensión o compañías privatizadoras, el gobierno está concretando multimillonarias compensaciones al sector que corporizó la ira popular el 20 de diciembre: los banqueros. La secuencia de estos pagos no se detuvo en ningún momento y ya acumula una cifra sideral.

Los financistas recibieron redescuentos por 20.000 millones durante la crisis del 2001, luego Duhalde inició la entrega de bonos (Boden 2012) que ya totalizan 14.000 millones y recientemente Lavagna asignó el pago de hasta 2800 millones por la alegada “indexación asimétrica de créditos pesificados”. Aún falta definir cual será el monto a otorgar por los amparos (pagados al valor del dólar libre en lugar de 1,40 más CER) cuya negociación actual gira en torno a 7000 millones. Lavagna se comprometió con el FMI a llegar a algún acuerdo frente a este reclamo pendiente de los financistas.

¿Cual será el costo final del rescate oficial del sistema bancario? Nadie se atreve a definir una cifra, pero teniendo en cuenta los antecedentes de México, Corea o Indonesia este socorro equivaldría al 12 % del PBI. Algunos cínicos suelen afirmar que también se “auxilió a los pequeños deudores hipotecarios”, pero este gasto no superó los 550 millones, mientras que en la compensación a los bancos ya se dilapidaron casi 36.000 millones. Otros analistas afirman que el sistema bancario siempre debe ser rescatado “para que la economía siga funcionando”. ¿Pero cual es la razón de esta primacía? ¿No resultaría más prioritario asegurar el alimento de los desocupados o el salario de los trabajadores para mantener la continuidad de la producción y el consumo? Los fondos públicos no se destinaron además al socorro de los bancos, sino a sus propietarios banqueros.

Como resultado de las compensaciones, la reactivación y desenlaces muy diversos en la situación de los ahorristas, el contexto financiero es muy diferente al prevaleciente durante el pico de la crisis. A dos años del corralito solo se mantienen restricciones sobre la disponibilidad de un porcentaje menor de los depósitos (8-10%) ya que a través de una impresionante emisión de bonos, el estado cargó con la cuenta de la expropiación sufrida por los ahorristas. Los que pudieron aguantar la tormenta recuperaron el dinero confiscado y quiénes necesitaron el dinero para sobrevivir debieron

rematar los títulos que recibieron a su bajo valor inicial de mercado. El drama de los pequeños ahorristas ha sido nuevamente una importante fuente de beneficios para los especuladores.

Pero en su conjunto el sistema financiero no se ha recompuesto del colapso sufrido con la convertibilidad. No ha quedado dirimida aún cuál será la estructura bancaria que prevalecerá en los próximos años. Por eso a pesar de la reactivación el crédito se mantiene retraído. Durante al año pasado este nivel de préstamos cayó -en proporción al PBI- a los niveles más bajo del mundo (8% frente a 20% de Brasil, 85% de España, 108% de Europa). En un marco de significativa acumulación de dinero, los bancos prefirieron preservar en sus arcas el excedente de liquidez en lugar de relanzar los préstamos.

Ni siquiera la recuperación de los depósitos y la flexibilización de las normas de control del Banco Central indujeron el resurgimiento del crédito. La alta morosidad de las grandes empresas deudoras fue más determinante de esta restricción que la incobrabilidad de los préstamos otorgados a las Pymes o a los consumidores. Además, la demanda potencial de crédito se mantiene acotada a los grupos beneficiarios de la reactivación, lo que excluye por completo al 60 % de pobres y a la masa de trabajadores con salarios congelados.

La reactivación no ha cerrado la crisis bancaria, porque a pesar de las compensaciones el negocio se achicó para las entidades que sufrieron pérdidas patrimoniales. El destino de varios bancos todavía es una incógnita, ya que muchos deben resolver si les conviene seguir en la Argentina. No hay que olvidar que la mitad de los activos de las entidades está constituida por títulos públicos de un estado en default y que el brutal achique de la economía tiene que tener un correlato en la esfera financiera. Los depósitos totales que en los 90 superaron los 80.000 millones de dólares hoy no alcanzan a 20.000 millones. Pero también es cierto que la propia depresión ha dejado una secuela de grandes negocios futuros que muchos financistas quieren aprovechar. Por eso el perfil próximo del sistema financiero es tan dudoso.

En cualquier variante los banqueros y sus voceros del FMI exigen que el estado asuma el costo de la remodelación. Además de las compensaciones pendientes reclaman una reforma del sistema que les asegure la protección del Banco Central (prestamista en última instancia, garante de créditos) de todas sus actividades futuras, el sostén directo de los negocios fracasados (compra de carteras irregulares), la bancarización compulsiva de los perceptores de subsidios oficiales (planes de jefes y jefas), algún mecanismo de indexación para asegurarse el cobro de las acreencias si repunta la inflación y cierta privatización de los tres bancos públicos.

El principio que guía la reestructuración de los bancos es el mismo que desangra al país desde hace décadas: los entidades no arriesgan su patrimonio cuándo los negocios florecen y reciben el socorro oficial cuándo se generalizan las pérdidas. Esta forma de subsidio se recrean una y otra vez, sin que nadie explique cual es el sentido de preservar un sistema financiero privado invariablemente sostenido por el estado. La propuesta alternativa de

centralizar toda la actividad bancaria en torno a un régimen único y estatal constituye la mejor variante para un proyecto de reconstrucción popular de la economía.

OTRO CAMINO PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL.

El gran despliegue retórico del gobierno a favor de MERCOSUR y la integración latinoamericana apenas disimula la aceptación oficial del “ALCA light” que Kirchner ratificó al enviar varias señales aprobatorias del proyecto de dominación comercial que impulsa Estados Unidos. La sanción legislativa del régimen de propiedad intelectual propiciado por los laboratorios extranjeros y el comando que ejerce el ex funcionario menemista Martín Redrado de todas las tratativas de libre comercio confirman que el acuerdo con Estados Unidos figura en la agenda del gobierno.

Esta alianza no requiere la aceptación de los términos originales del ALCA, ya que esa versión inicial ha sido reemplazada por una variante más flexible, que eximiría a los participantes de compromisos estrictos y plazos perentorios. Pero esta alternativa sustituta mantiene el objetivo central de conformar un área de libre comercio favorable a las exportaciones norteamericanas.

El ALCA constituye además tan solo una instancia de las presiones norteamericanas para reducir aranceles y extranjerizar los servicios. Otro ámbito de este chantaje son las negociaciones multilaterales en la OMC o los acuerdos bilaterales. En este marco, el gobierno mantiene por un lado la alianza con Brasil para negociar en bloque con Estados Unidos, mientras que por otra parte no descarta seguir los pasos de los países que optaron por convenios directos con Estados Unidos. Todo depende del juego de intereses empresarios, que a través de distintos lobbys operan en el Ministerio de Economía.

Si los exportadores que comanda Redrado ganan la partida se afianzará la tendencia a algún acuerdo estrecho con primera potencia. Se negocia que Estados Unidos reduzca los aranceles para varias exportaciones nacionales a cambio del aval a los subsidios norteamericanos al agro. Si Argentina acepta este acuerdo, los grupos locales con Estados Unidos obtendrán altos lucros a costa del resto del país. Este ha sido el resultado del Nafta en México y es la perspectiva del reciente acuerdo bilateral de Chile. En el primer caso las consecuencias ya están a la vista en la terrible secuencia de desnacionalización bancaria, retroceso industrial, quiebra agrícola y emigración que padece la economía mexicana. En Chile los negocios de las compañías mineras, fruterías, pesqueras o madereras podrían florecer a costa del agobio impositivo y la quiebra de las pequeñas y medianas empresas. Pero Chile ya es una economía abierta al exterior, su comercio es complementario del norteamericano y detenta una estructura industrial muy limitada.

En cambio para la Argentina, cualquier avance hacia el libre comercio tendrá consecuencias más gravosas. Aceptar el mantenimiento de

los subsidios agrícolas en Estados Unidos a cambio de concesiones puntuales en el ingreso de ciertos productos al mercado norteamericano implicaría convalidar una desigualdad estructural en las relaciones comerciales entre dos países que compiten por las mismas exportaciones, en mercados semejantes.

En el terreno industrial, cualquier convenio de libre comercio supondría reiniciar el ciclo de apertura que demolió gran parte del tejido productivo bajo la convertibilidad. En el campo de los servicios, Estados Unidos no apunta tanto a las escasas privatizaciones pendientes, sino al desplazamiento de sus competidores en los negocios de obra pública y en las actividades sanitarias o educativas. Finalmente, no hay que olvidar que cualquier tratado reforzaría la transferencia de soberanía a los tribunales internacionales para dirimir los litigios comerciales, en un momento que el país acumula demandas financieras como consecuencia del default.

El trasfondo de las negociaciones por un “ALCA light” es la continuada crisis del MERCOSUR. Transcurrida más de una década desde el inicio de esta asociación, Brasil y Argentina no han logrado avanzar en la conformación de un área monetaria común y tampoco han podido superar sus divergencias arancelarias. De hecho, la unión aduanera no funciona porque el arancel externo común se encuentra perforado por la drástica apertura que implementó Argentina durante la convertibilidad sin ningún tipo de acompañamiento por parte de Brasil. Por eso persisten las diferencias entre los regímenes arancelarios que rigen en ambos países. Los sistemas de admisión temporaria de Argentina son la antítesis de la protección selectiva que impone Brasil.

Por otra parte, el intercambio corriente se encuentra periódicamente afectado por la vigencia de políticas de subsidios divergentes, que no se han podido armonizar por la ausencia de los sistema de arbitrajes previstos para dirimir estos conflictos. El correlato político de esta inconsistencia económica es la ausencia de instituciones comunes para toda la zona. Sin moneda común, ni políticas macroeconómicas conjuntas, el MERCOSUR continuará languideciendo.

Este estancamiento obedece a la dependencia unilateral de cada país hacia sus acreedores y el FMI. En cada renegociación de la deuda se suscriben compromisos de ajuste que impiden cualquier coordinación regional, ya que estos acuerdos definen porcentajes de superávit diferenciados, cronogramas impositivos distintos y políticas de subvención industrial peculiares.

La erosión de los acuerdos se evidencia en las recurrentes oscilaciones la balanza comercial entre Brasil y Argentina que suceden a las crisis devaluatorias que afectan a cada nación. Al desplomarse la convertibilidad pareció insinuarse un nítido ciclo de superávit argentino, pero como la recesión brasileña coincide con la recuperación económica local, ha reaparecido en el país la conocida queja contra la “invasión de las importaciones paulistas”. Además se han reavivado las tensiones en los sectores más conflictivos (calzado, textiles, línea blanca).

El trasfondo del problema radica en que a pesar de su dimensión continental, Brasil no puede emular a Estados Unidos como locomotora zonal, ni a Alemania en su sostén de una moneda común. Los dos grandes socios de Sudamérica son países sometidos a la dominación imperialista y no se perfilan como un bloque competitivo en el mercado mundial. Por eso el aumento del intercambio comercial entre Argentina y Brasil, no mejoró el perfil de ninguno de los dos países frente a los concurrentes extraregionales.

El MERCOSUR actual no constituye una alternativa popular frente al ALCA, porque la década transcurrida desde la formación de esa alianza ha sido nefasta para los trabajadores y desocupados de la región. Los años del MERCOSUR han estado signado por el ajuste, los recortes salariales, los despidos masivos y la pauperización. Esta tragedia social indica que este acuerdo no representa un remedio para los problemas de la región. Mientras los negocios de varios grupos empresarios prosperaron con subsidios y beneficios arancelarios, la mayoría popular soportó los golpes de la flexibilización laboral y del recorte de los sueldos.

Frente a este resultado numerosos analistas proponen crear “Otro MERCOSUR”, pero el problema no radica en el nombre sino en el contenido del proyecto. El MERCOSUR continuará sirviendo a los intereses de la minoría capitalista si gira en torno al mejoramiento de la rentabilidad de las corporaciones afincadas en varios países. Seguirá beneficiando a un grupo selecto de corporaciones si se limita a promover “economías de escala” basadas en el “abaratamiento del costo salarial” y en su perfil actual continuará perfeccionando la división del trabajo en zonas que aportan materias primas y localidades que industrializan esos recursos.

La única opción positiva es cambiar las prioridades y colocar la integración al servicio de las aspiraciones populares. Hay que coordinar la solidaridad y no la competitividad, asegurar la estabilidad del empleo y no la libre movilidad de los capitales, eliminar la pobreza y la desnutrición y no las restricciones a los negocios empresarios. Este tipo de integración no puede desenvolverse en torno al comercio, sino que debe desarrollarse en función de las reivindicaciones sociales. La prioridad es unir a los pueblos y no atarlos a los intereses de cada clase dominante.

Para avanzar hacia una integración de los pueblos latinoamericanos hay que encarar una batalla conjunta contra la dominación comercial y financiera del imperialismo. La resistencia contra el ALCA debe ir asociada a la lucha por cesar el pago de la deuda externa, porque cualquier freno del ALCA acompañado del mantenimiento del pago de la deuda implicaría la continuidad del ajuste.

UN APOORTE AL MOVIMIENTO DE RESISTENCIA POPULAR.

El contexto económico actual es muy diferente al predominante cuándo suscribimos los documentos anteriores del EDI. No se vive actualmente el estallido de fines del 2001, ni la situación de sostenido colapso del 2002, ni tampoco el pasaje de la depresión a la reactivación que se registró a mitad del año pasado. Pero la miseria y los sufrimientos

populares permanecen sin cambios y por esta razón el sentido de nuestras propuestas no ha variado.

Los integrantes del EDI intentamos analizar las modificaciones registradas en cada coyuntura, observando el comportamiento del ciclo, el funcionamiento del aparato productivo, las tendencias del comercio y el rumbo de las finanzas. Pero no aspiramos a competir con ninguna fundación o consultora en la cuantificación de las variables o a la formulación de previsiones de corto plazo.

Nuestro objetivo es diferente. Apuntamos a desenvolver las propuestas que los movimientos de lucha plantean en oposición al neoliberalismo y el capitalismo. Recogemos las reivindicaciones de esta resistencia popular y desarrollamos su contenido, buscando transformar las consignas en programas y los escuetos enunciados en planteos más sólidos. Pretendemos también brindar argumentos de polémica contra las justificaciones en boga de la explotación, el desempleo y la degradación salarial.

Esta batalla ideológica se ha tornado más importante y más compleja desde que asumió un gobierno que encubre con una retórica antiliberal su apuntalamiento del modelo. Como la ortodoxia ha perdido autoridad, sus adversarios heterodoxos han tomado ahora en sus manos la función de sostener el status quo. Los integrantes del EDI rechazamos esta naturalización de la miseria y resistimos la resignación de los economistas que aplauden al gobierno. No bajamos los brazos y continuamos promoviendo el debate sobre las medidas que permitirían una reconstrucción económica favorable a la mayoría popular.

La coyuntura política actual es favorable para avanzar en este proyecto porque las clases dominantes recompusieron parcialmente la estabilidad política y el crecimiento económico, pero no desactivaron la protesta social. Un nuevo movimiento de masas con sus partidos y organizaciones de piqueteros o trabajadores se ubica hoy en la primera fila de la batalla por las reivindicaciones de los ocupados y desocupados. Para contribuir a la elaboración del programa económico de este movimiento presentamos este documento de los Economistas de Izquierda.

18-02-04

FIRMAN

Jorge Marchini

Guillermo Gigliani

Claudio Katz

Andrés Mendez

Luis Becerra (este es el que seudonimo)

Eduardo Lucita

José Castillo

Pedro Resels

Ovidio Pepe.

Alberto Torres.

